



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

DON ALFONSO RAMOS DE MOLINS SAINZ DE BARANDA, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión número 02/05 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, celebrada el día 27 de enero de 2005, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el cual, en relación con la tramitación del procedimiento número **RO 2004/1955**, se aprueba la siguiente

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE LA CONSULTA FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE OLVERA (CADIZ) SOBRE LA ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES DEL PROYECTO PRESENTADO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RED WI-FI EN LA LOCALIDAD DE OLVERA (CADIZ).

I. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de diciembre de 2004, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones escrito del **AYUNTAMIENTO DE OLVERA**, mediante el cual solicita a esta Comisión su pronunciamiento en cuanto a la legalidad del proyecto técnico que se acompaña a dicho escrito, elaborado por la mercantil TIERRAPLEX, S.L., consistente en la instalación de una red de conexión inalámbrica que proporcione cobertura, mediante ondas de radio, para las poblaciones de Algodonales y Olvera y que sirva de soporte para la prestación de servicios de acceso a Internet.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

II. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la LGTel, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene por objeto *“el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los mismos”*. Para el cumplimiento de este objeto, la ley atribuye a esta Comisión determinadas funciones, además de cualesquiera otras que legal o reglamentariamente se le atribuyan o le encomienden el Gobierno o el Ministerio de Ciencia y Tecnología¹.

Concretamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 h) de la LGTel, la Comisión podrá asesorar a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones locales, a petición de los órganos competentes de cada una de ellas, en relación con el ejercicio de competencias propias de dichas Administraciones públicas que entren en relación con la competencia estatal en materia de telecomunicaciones.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO

Del análisis del proyecto técnico elaborado por TIERRAPLEX y presentado por el Ayuntamiento de Olvera ante esta Comisión, se colige que la citada mercantil se encargará únicamente de las operaciones de instalación o montaje de una red inalámbrica que proporcione cobertura mediante ondas de radio a los municipios de Olvera y Algodonales, mientras que serán los propios Ayuntamientos los que asuman la gestión y explotación de la red, es decir, su titularidad; así mismo, serán dichas Corporaciones municipales quienes presten el servicio de acceso a Internet a través de la proyectada red inalámbrica.

Atendiendo a la descripción del proyecto, TIERRAPLEX establecerá una red “Wi-Fi” en la banda de 2.4 GHz, mediante la utilización del protocolo 802.11b/g de la IEEE. El acceso a la WAN se basa en la tecnología ADSL.

Mediante un radio enlace principal se establecerá una línea de comunicación ADSL en un lugar de propiedad municipal. Desde este lugar se repartirá la señal al propio municipio así como a la localidad vecina. En dicho centro de distribución se recomienda instalar un servidor Proxy al objeto de proveer seguridad a la red.

¹ Las referencias que se realicen al Ministerio de ciencia y Tecnología se entienden en la actualidad realizadas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El resto de puntos de acceso (uno por cada 40 o 60 conexiones), se repartirán entre los núcleos urbanos y se instalarán mayoritariamente en edificios públicos municipales.

Por lo que respecta a los servicios de datos, a los que servirá de soporte la citada red, se prevé inicialmente la prestación de acceso a Internet y voz sobre IP. En cualquier caso serán los Ayuntamientos interesados los que dispondrán cuales son los servicios de datos que proporcionarán a sus ciudadanos.

IV.- REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA INSCRIBIRSE COMO OPERADOR DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Aunque el Ayuntamiento de Olvera se limita a adjuntar el Proyecto Técnico y solicitar un pronunciamiento general en cuanto a su legalidad, interesa a esta Comisión, atendido que dicho Ayuntamiento será el titular de la futura red así como quien preste los servicios de acceso a Internet, exponer el régimen jurídico establecido en la legislación sectorial de telecomunicaciones para los operadores en general así como para las Administraciones Públicas en particular.

A) ANÁLISIS DEL RÉGIMEN GENERAL PREVISTO PARA LA EXPLOTACIÓN DE REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA.

En las distintas consultas formuladas por diversos Ayuntamientos en relación a la necesidad de inscribirse como operadores de comunicaciones electrónicas², esta Comisión ha ido analizando el nuevo régimen establecido en la actual Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante LGTel).

De esta forma, en la citada LGTel, se rompe con el sistema de otorgamientos de títulos habilitantes que se establecía en la antigua ley, pasando a un sistema en el que se simplifican los títulos habilitantes hasta dejarlos en una habilitación concedida con carácter general e inmediato por la propia ley.

En consecuencia, la única obligación impuesta en el artículo 6.2 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones es la notificación a esta Comisión, con anterioridad al inicio de la actividad, de la intención de prestar una determinada

² Entre otras, Resolución de 27 de mayo de 2004, en relación con las consulta formulada por el Ayuntamiento de Barcelona sobre la necesidad de inscribirse como operador para la prestación de determinados servicios sobre red Wi-Fi. (RO 2004/542) y Resolución de 3 de septiembre de 2004 contestando a una consulta planteada por la Comunidad Autónoma de Asturias sobre idéntico asunto: (RO 2004/1085).



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

actividad de comunicaciones electrónicas, en los términos que se determinen en un Real Decreto de desarrollo y con el sometimiento pleno a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad notificada³.

De conformidad, pues, con el nuevo régimen jurídico establecido, no se requiere un acto expreso de esta Comisión o una inscripción previa en el Registro, para que el operador pueda ejercer los derechos derivados de la autorización, sino que basta con el cumplimiento de los requisitos del artículo 6 y la notificación fehaciente de la intención de iniciar una determinada actividad⁴ para que el operador pueda dar inicio a la misma. Sólo quedarán exentos de esta obligación quienes exploten redes y se presten servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación.

A la notificación citada seguirá, salvo que sea defectuosa, una inscripción en el Registro de operadores, creado en virtud de lo establecido en el artículo 7 de la LGTel. Una vez que el interesado notifique pues a esta Comisión que va a iniciar la actividad y se acredite su capacidad de obrar, se procederá a su inscripción en el Registro de operadores, junto con las condiciones para desarrollar la actividad y sus modificaciones.

La correspondiente comprobación del cumplimiento, por el operador inscrito, de las condiciones que se establezcan reglamentariamente para la prestación de los servicios o la explotación de las redes de comunicaciones electrónicas será realizada “ex post” por esta Comisión.

Finalmente, tal y como se desarrollará en el último apartado del presente informe, el artículo 8 de la LGT, en su cuarto apartado, establece que la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones públicas, directamente o a través de sociedades en cuyo capital participen mayoritariamente, se ajustará a lo dispuesto en esta ley y sus normas de desarrollo y se realizará con la debida separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación. Asimismo prevé, que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá imponer condiciones especiales que garanticen la no distorsión de la libre competencia.

³ En tanto no se apruebe el Reglamento previsto en el citado artículo 6.2, será de aplicación lo dispuesto en la propia LGTel y en la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

En la página Web de la CMT se encuentra publicada la documentación requerida para la notificación de las inscripciones. (www.cmt.es).

⁴ Esto supone un cambio importante respecto de la antigua normativa, en la que se exigía, para las licencias individuales, resolución expresa de la Comisión para poder prestar el servicio, y previa inscripción en el Registro de Autorizaciones, para el caso de las autorizaciones generales.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

B) REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS OBJETO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE OPERADORES.

Como previamente se ha señalado, cuando un operador tiene la intención de explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas deberá notificar su intención a esta Comisión, al objeto de que se inscriba en el Registro de Operadores creado por la nueva LGTel. Pero esta obligación de notificar a la Comisión sólo nace cuando el servicio a prestar es un servicio público de comunicaciones electrónicas o cuando la red a explotar sea una red pública de comunicaciones electrónicas, es decir, cuando sobre la misma se presten servicios de comunicaciones disponibles al público. Quedarán exentos de esta obligación cuando la prestación del servicio o la explotación de la red se realicen en régimen de autoprestación.

De acuerdo con el Anexo 2 de definiciones de la LGTel, una red pública de comunicaciones es aquella que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público. Es decir, para poder calificar una red de comunicaciones como una red pública es necesario que el servicio que se soporta sobre la misma sea un servicio de comunicaciones electrónicas y que, además, esté disponible al público en general.

Atendiendo a la descripción del proyecto a implementar en el municipio de Olvera, la red que pretende instalar es una red inalámbrica de comunicaciones, basada en el estándar 802.11b, denominada red Wi-Fi. Este tipo de redes utilizan el dominio público radioeléctrico en las bandas de frecuencias de 2.400 a 2.483,5 MHz y las bandas de 5.150 a 5.350 junto con la banda de 5.470 a 5725 MHz. Este tipo de frecuencias, de acuerdo con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias⁵, están asignadas a determinados servicios⁶, si bien, existen excepciones de forma que el uso de alguna de las bandas está previsto como uso común del espectro radioeléctrico.

A los efectos que aquí interesan, la Orden de 9 de marzo de 2000 -por la que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril,

⁵ Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias aprobado por la Orden CTE/630/2002, de 14 de marzo de 2002, y modificado por la Orden CTE/2082/2003, de 16 de julio.

⁶ Estas bandas están asignadas a los servicios "fijo", "móvil", "radiolocalización", "radionavegación marítima", "investigación espacial", "radionavegación aeronáutica", "fijo por satélite", "exploración de la tierra por satélite" y "aficionados", y que, en cuanto a su uso, éste podrá ser de uso por el Estado, uso por el Estado para la gestión a través de Administraciones Públicas o por concesión, uso mixto ("privativo o de "utilización por el Estado") o de "uso especial". No obstante lo expuesto, las citadas Órdenes establecen también determinadas excepciones que se detallan en las Notas UN-85 y UN-128 (utilización nacional) para el "uso común" de alguna de estas bandas.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

General de Telecomunicaciones en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico- establece en su artículo 13 que el uso común del espectro radioeléctrico no precisará del otorgamiento de ningún título habilitante. Es decir, el uso del dominio público radioeléctrico en esas bandas, no precisa ningún tipo de autorización.

Cuestión distinta es la necesidad de inscribir como operador, en el Registro creado por la LGTel, al titular de una red Wi-Fi cuando esta red sea calificada como red pública de comunicaciones electrónicas.

Como anteriormente se ha señalado, para calificar la red de pública es necesario que sobre la misma se presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. De acuerdo con la documentación presentada por el Ayuntamiento, la red va a soportar un servicio de transmisión de datos de acceso a Internet con carácter general a cualquier posible usuario siempre que se encuentre dentro del ámbito de cobertura de la red inalámbrica instalada.

Por lo tanto, la red que se pretende instalar debe ser considerada como una red pública de comunicaciones electrónicas, por cuanto que será utilizada para prestar un servicio de transmisión de datos disponible al público en general.

En atención a lo anterior, y en el momento que corresponda, el Ayuntamiento de Olvera, como titular de la red pública de comunicaciones electrónicas que se proyecta instalar y en su condición de proveedor de acceso a Internet, deberá realizar la preceptiva notificación a esta Comisión, al objeto de que se produzca su inscripción en el Registro de Operadores como operador de una red pública de comunicaciones electrónica y prestador de un servicio de transmisión de datos disponible al público.

IV.- SOBRE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN SU CONDICIÓN DE OPERADORES DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.

El Ayuntamiento de Olvera, una vez adquiera la condición de operador de comunicaciones electrónicas, dada su naturaleza de Administración Pública, quedará sujeto, tanto a las previsiones generales establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones para todos los operadores, como a las específicas prevista para las Administraciones públicas en el apartado 4 del artículo 8 de la citada Ley.

Sobre la base de lo anterior, se considera procedente incluir en el presente informe los criterios que, a juicio de esta Comisión, deben observar las



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Administraciones Públicas y las entidades participadas mayoritariamente por ellas cuando intervengan en los mercados de telecomunicaciones, y que se encuentran recogidos en el Catálogo de Buenas Prácticas elaborado, a estos efectos, por esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones:

1.- Toda intervención de la Administración pública, incluidas las decisiones empresariales públicas, en el sector de las telecomunicaciones debe venir justificada desde la perspectiva del interés público.

Este interés público puede concretarse en la promoción del desarrollo del sector de las telecomunicaciones, la utilización de los nuevos servicios y el despliegue de redes, y el acceso a éstos en condiciones de igualdad, e impulsar la cohesión territorial, económica y social. También podrá consistir en propiciar el incremento de las ofertas, promover la inversión eficiente en nuevas infraestructuras, el fomento de la innovación tecnológica y, en definitiva, los beneficios para los ciudadanos derivados del régimen de libre competencia.

Cuando existan intereses concurrentes, este interés público habrá de valorar los objetivos previstos en la legislación sobre telecomunicaciones y ponderar los distintos intereses en juego. Así se deberá privilegiar las soluciones que, satisfaciendo las mismas necesidades:

- a) Fomenten la competencia en el mercado (Por ejemplo, utilizando el concurso público como forma de selección y adjudicación de las empresas encargadas de satisfacer las necesidades no cubiertas debidamente por el mercado).
- b) Promocionen las inversiones eficientes en materia de infraestructuras y el fomento de la innovación.
- c) Resulten neutrales desde el punto de vista tecnológico, es decir, no condicionen la tecnología utilizada para prestar los servicios (Por ejemplo que afecten a los servicios de banda ancha con independencia de la tecnología utilizada).

2.- Está justificada la intervención de la Administración cuando la demanda esté insuficientemente atendida por el sector privado (cuando exista un fallo de mercado).

3.- La imposición de obligaciones de servicio público en telecomunicaciones supone la definición por el Gobierno de una obligación de servicio público financiada con cargo a presupuestos públicos en el marco de una organización unitaria para el territorio español, de las necesidades a atender. Con esta fórmula es posible financiar el coste de modo que se ofrezcan los servicios a un precio asequible.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

4.- La iniciativa pública en la prestación de servicios o en la explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas no debe limitar el derecho a la libertad de empresa de los operadores privados ni incumplir las reglas que rigen la economía de libre mercado, excepto en la medida necesaria para cumplir con el objetivo de interés general perseguido y guardando el principio de idoneidad y proporcionalidad.

Ello implica que cuando la Administración actúa como tal Administración en el ámbito de sus competencia (actos de autoridad) no podrá incurrir en financiaciones ilegales contrarias al régimen de subvenciones públicas ni a otras actuaciones discriminatorias igualmente contrarias a la libre competencia.

Por su parte, cuando la Administración actúa como un operador más en el mercado debe sujetarse, al menos, a las mismas reglas que el resto de los operadores, lo que implica que no podrá entrar en acuerdos colusorios ni abusos de posición de dominio ni recibir ayudas públicas que distorsionen la competencia.

Junto con estas obligaciones que son propias de todos los operadores, la Administración/operador público deberá además gestionar estos servicios con la debida separación de cuentas y con respeto a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación.

5.- Las Administraciones públicas, aun cuando actúen en el mercado de las telecomunicaciones sujetas a la misma normativa sectorial que el resto de operadores privados, deberán cumplir con las normas que regulan la actividad financiera correspondiente a su naturaleza pública con especial mención a la previsión del gasto público y su control y la Ley General de Subvenciones en lo que les sea de aplicación.

6.- Las Administraciones públicas que actúen como operadores en el mercado, con carácter previo al inicio de la actividad deberán presentar, ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la notificación fehaciente a la que se refiere el artículo 6.2 de la LGTel. En el caso de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el momento del inicio de la actividad se corresponde con el momento de la oferta del servicio a los usuarios a los que va destinado (no está previsto un tratamiento diferente para las ofertas de servicios en pruebas). En el caso de la explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas el inicio de la actividad se corresponde con cualquiera de los siguientes momentos: i.) el inicio de la creación de la red; ii) el inicio de su aprovechamiento; ii.) la toma del control de la red; ó iii) la puesta a disposición de la red a los posibles usuarios de la misma.

7.- Las Administraciones públicas deben llevar cuentas separadas con respecto a sus actividades como operadores de telecomunicaciones.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Esta separación contable se ha de concretar de la misma manera en la que se exigiría para empresas jurídicamente independientes: identificando todas las partidas de costes e ingresos, especificando la base de cálculo y los métodos de asignación utilizados, con un desglose pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales.

8.- Las Administraciones públicas deben atenerse a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación.

Con carácter general no deberán favorecer, en el ejercicio de sus funciones públicas, sus propias actividades como operadores de telecomunicaciones en detrimento de los derechos del resto de los operadores privados que concurren o puedan concurrir con ellas en el mismo mercado.

9.- Los operadores públicos no deben realizar sus actividades de telecomunicaciones de forma tal que establezcan barreras de entrada a los operadores privados, ni provoquen la salida del mercado de éstos por la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones.

10.- Las Administraciones públicas, constituidas como operadores de servicios o redes públicas de comunicaciones electrónicas que prestan servicios en un entorno de competencia, deben aspirar a obtener un rendimiento normal, es decir, el que todo inversor privado en una economía de mercado trataría de obtener de su inversión de capital.

Lo anterior es de aplicación tanto a los precios aplicados como a la financiación realizada/obtenida.

11.- Las Administraciones públicas deberán formar sus ofertas de precios a los usuarios de servicios o redes públicas de comunicaciones electrónicas de conformidad con las reglas que rigen los mercados en competencia.

La Administración, aunque no sea declarado operador dominante, no puede vender por debajo de coste en un mercado en competencia, a menos que se trate de una estrategia comercial asumible por cualquier operador privado sin recurrir a la financiación pública de las pérdidas.

12.- Cuando se trate de servicios prestados en libre competencia, la financiación de la actividad deberá, en todo caso, realizarse por medio de los rendimientos de la explotación de la misma, no pudiendo neutralizarse pérdidas con transferencias de fondos públicos. La única financiación externa permitida es la que cumpla con el principio del inversor privado en una economía de mercado (también en lo que se refiere a la constitución de la sociedad) salvo que se impongan obligaciones de servicio público, en cuyo caso es lícita la financiación que no exceda del coste ocasionado por la obligación y se cumplan los requisitos de la recomendación 14.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

13.- Con carácter general la financiación de los servicios considerados de interés económico general (también fuera del ámbito de las telecomunicaciones) por parte de las Administraciones públicas es legítima si con ella no se está concediendo ventaja alguna a una empresa que compite con otras empresas. De este principio pueden extraerse las siguientes consideraciones prácticas:

En principio será legítima la financiación pública de infraestructuras que sean necesarias para prestar un servicio que se considera incluido entre las responsabilidades de la Administración para con los ciudadanos y que se limitan a las necesidades de este servicio, o que el mercado nunca realizaría en las mismas condiciones y en general las que no favorecen selectivamente a una empresa.

Incluso en estos casos la infraestructura no debería reservarse para un único usuario, sino estar abierta a distintos operadores y, si es posible, a distintas actividades. Si se alquila a empresas, se les debería cobrar un canon de un importe apropiado.

En caso de utilización limitada a una sola empresa, se debería respetar las condiciones en materia de transparencia y de no discriminación. Además, en relación con el método de designación de la empresa encargada del servicio de interés general, todas las empresas interesadas deberían poder competir en igualdad de condiciones para prestar estos servicios. Las condiciones y criterios deben ser objetivos y aplicarse de manera transparente y no discriminatoria.

14.- Las subvenciones públicas que tengan por objeto permitir la explotación de servicios de interés general será legítimas si pueden considerarse una compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público.

No obstante para que a tal compensación sea legítima debe existir total transparencia respecto de su contenido, coste y financiación para distinguirse de la explotación de redes y prestación de servicios de que se prestan en competencia con otros operadores para lo que deberá reunir los siguientes requisitos:

- Que la empresa beneficiaria esté efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y que estas obligaciones se hayan definido claramente.
- Que los parámetros para el cálculo de la compensación se hayan establecido previamente de forma objetiva y transparente;



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- Que la compensación no supere el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones;
- Cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública, que el nivel de la compensación necesaria se ha calculado sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.

15.- La imposición de obligaciones de servicio público a una empresa participada mayoritariamente por la Administración pública y la financiación de las mismas deberán realizarse de acuerdo con los mismos principios de transparencia, publicidad y concurrencia a fin de asegurar que no se produzcan discriminaciones entre operadores que sean contrarias a la libre competencia.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Alfonso Ramos de Molins Sainz de Baranda

Carlos Bustelo García del Real